

CONFERENCIAS



fundación para el análisis y los estudios sociales



**Intervención de José María Aznar
en la presentación del informe
*La reforma del
Sistema Financiero Internacional***

(Navacerrada, 3 de julio de 2009)

Me complace poder presentarles hoy el informe ***“La reforma del sistema financiero internacional. Una propuesta con las lecciones de la crisis”***, que ha elaborado la Fundación FAES.

Este informe es el resultado del encargo que realicé en otoño del año pasado a dos expertos españoles en el ámbito de las finanzas: el profesor Fernando Fernández y el economista Fernando Navarrete.

Les pedí a los directores del informe un estudio riguroso sobre la crisis financiera internacional, alejado de dogmatismos y orientado a extraer las necesarias lecciones de la crisis. Les formulé dos sencillas preguntas: ¿qué ha fallado? y ¿qué es conveniente reformar para corregir estos fallos? El informe que hoy presentamos proporciona respuestas sólidas a ambas cuestiones.

Una conclusión muy general es que esta crisis no es, en el fondo, tan distinta a la de otras crisis anteriores. Eso sí, es una crisis de mucha mayor intensidad, con nuevos canales de transmisión de la crisis y con nuevos retos a los que hay que dar respuesta. Por eso debemos extraer las oportunas lecciones de esta crisis y traducirlas en reformas, en buenas políticas, con el fin de recuperar un sistema financiero solvente capaz de dar respaldo a un crecimiento sólido y duradero.

Hoy están surgiendo distintas propuestas políticas que crearán unas nuevas bases para la regulación financiera internacional en el siglo XXI, como la que ha presentado recientemente el presidente de los Estados Unidos.

También hay hoy quienes, desde las responsabilidades de gobierno, están extrayendo lecciones de esta crisis y están reaccionando con mejor regulación bancaria y financiera, mejor supervisión pública y mayor eficacia en las funciones que el Estado tiene encomendadas en cualquier economía libre, tan importantes como insustituibles. A todos ellos, este informe de la Fundación FAES les resultará útil.

Pero hay también quienes, por el contrario, guiados por el dogmatismo, han preferido reaccionar a la crisis con mayor y peor regulación, y con mayores dosis de intervencionismo y proteccionismo. A estos últimos este informe les resultará tan incómodo como inoportuno para sus intereses.

Las reformas en el sistema financiero internacional son imprescindibles para recuperar la bonanza y la prosperidad.

Es impensable un escenario de recuperación económica vigorosa sin un sistema financiero internacional solvente que canalice el ahorro hacia los proyectos de futuro de las familias y las empresas. Lo mismo se puede decir de los sistemas financieros nacionales.

El sistema financiero tiene que volver a funcionar normalmente sin el apoyo de las medidas públicas temporales de emergencia que se implantaron como respuesta ante la amenaza de colapso. Necesitamos que los ciudadanos recuperen la

confianza en el sistema financiero y, para ello, hay que arreglar lo que ha fallado.

En mi opinión, y tras la lectura de este informe, los principales factores de esta crisis financiera que hay que corregir son:

En primer lugar, los excesos cometidos por los principales bancos centrales del mundo, que cometieron el grave error de inundar de dinero la economía mundial en los momentos de auge económico. Esta errónea política monetaria ha alimentado graves desequilibrios.

En segundo lugar, los errores del Estado en la regulación de la actividad financiera.

En tercer lugar, los fallos del Estado en su responsabilidad de supervisar la salud de las entidades financieras y el buen funcionamiento de los mercados de valores.

En cuarto lugar, las equivocaciones de buena parte de los gobiernos en el diseño de muchas de sus políticas públicas. El gobierno de los Estados Unidos se equivocó gravemente en su política de promoción de la compra de vivienda. Fomentó la concesión de créditos a cientos de miles de personas que no estaban en condiciones de devolver sus préstamos. En Europa, la mayoría de los gobiernos se equivocó apostando por el gasto público excesivo y la ausencia de reformas económicas.

En quinto lugar, las imprudencias cometidas por la mayoría de los gestores bancarios en casi todo el mundo. Como bien afirma Manuel Pizarro, los banqueros, o, en el caso español, más bien, los directivos de las cajas de ahorros, le perdieron el respeto a su trabajo.

Consideraron que su labor, la evaluación del riesgo y la asignación de crédito a quien está en condiciones de devolver el dinero prestado, tenía poco glamour.

Pensaron que tenía mucho más glamour invertir el dinero de los depositantes en proyectos enormemente arriesgados, por puro interés político, por no hacer referencia a los créditos concedidos por intereses inconfesables.

Y es que, señoras y señores, aunque no se lo crean, el presidente de la Caja Castilla La Mancha no era George Bush.

Caja Castilla La Mancha no ha quebrado por haber invertido el dinero de miles de familias en “hipotecas subprime”. En eso no han invertido un solo euro. Lo han invertido en otras cosas.

Los responsables de haber llevado a la insolvencia a unas cuantas cajas de ahorros españolas no son “peligrosos neocon” ni “despiadados ultraliberales”. Más bien todo lo contrario.

La crisis también tiene mucho que ver con la falta de transparencia y de información precisa, veraz, relevante y a tiempo en los mercados financieros.

Finalmente, ha habido falta de honradez, que se ha traducido en estafas y escándalos financieros multimillonarios. El respeto a los derechos de propiedad y al imperio de la ley exige el castigo a los responsables de estas estafas.

Porque en los países que de verdad creen en el libre mercado, como los Estados Unidos, quienes estafan, es decir, quienes violan las reglas del mercado, se pudren en la cárcel, como Madoff.

Ya nos gustaría ver en España sentencias tan ejemplares y, en tiempo, tan diligentes como las que hemos visto en Estados Unidos.

En los países en los que se cree menos en el libre mercado, quienes estafan y además no devuelven lo robado pasan una temporada corta en la cárcel, y después se pasean por los platós de televisión.

El gobierno socialista acaba de meter casi 100 mil millones de euros, es decir, 6.000 euros de cada familia española, y eso que han llamado FROB, que es un cajón lleno de dinero del contribuyente que se va a transferir a las cajas de ahorros.

Y algunas preguntas son imprescindibles:

¿Para qué y cómo se va a manejar tanto dinero?

¿Se va a garantizar que el dinero público utilizado es el mínimo posible?

¿Se va a garantizar total transparencia en la inyección de dinero público en las cajas de ahorros?

¿Se va a garantizar la ausencia de interferencias políticas en los procesos de fusión de cajas de ahorro que requieren dinero público?

¿Se va a garantizar que aquellos incompetentes que han llevado a la insolvencia a una caja de ahorros o a un banco pierden su empleo?

Ante los problemas de solvencia del sistema financiero de un país, hay dos caminos: hacerlo bien o hacer lo que está haciendo el gobierno español.

Hay dos posibles actitudes; garantizar que la recapitalización de los bancos y cajas de ahorro le cuesta al contribuyente lo mínimo posible, o, por el contrario, prescindir de este criterio, como ha decidido el gobierno español.

Un gobierno puede garantizar la plena transparencia en la inyección de dinero público en los bancos y cajas de ahorro con problemas, como es razonable, o puede prescindir de este criterio, como ha decidido el gobierno socialista.

Un programa de rescate bancario se puede gestionar con criterios profesionales y sin interferencias políticas, o gestionarlo como lo va a gestionar el gobierno.

El gobierno se dispone a premiar con miles de millones de euros, que salen de los bolsillos de las familias, de las pymes y de los autónomos, a banqueros y directivos de las cajas de ahorro que han demostrado ser, cuando menos, incompetentes.

En cualquier empresa, serían despedidos. El gobierno, por el contrario, les premia, regando con el dinero de todos a las entidades que han demostrado no saber dirigir. La pregunta es: ¿por qué? ¿Qué hay que tapar? ¿Qué hay que recompensar?

El diseño del programa socialista de rescate bancario ha rechazado utilizar las herramientas disponibles, que se han utilizado en el pasado por anteriores gobiernos y que servirían también en la actualidad: los instrumentos de intervención, sustitución de equipos directivos, recapitalización y venta de activos en pública subasta.

El gobierno se podría haber limitado a inyectar dinero en los Fondos de Garantía de bancos y de cajas de ahorro.

Pero ha preferido utilizar una tremenda cantidad de dinero de todos los españoles en nuevos instrumentos que se diferencian de los anteriores en que permiten garantizar la impunidad de los responsables de haber llevado a la insolvencia a las entidades financieras.

El gobierno se ha inventado un sistema que consiste en que algunos saltan de “caja a caja, como en la Oca, y cobro porque me toca”. Este juego puede ser muy divertido para algunos, pero no tiene ninguna gracia para los millones de familias españolas a los que se les va a subir los impuestos para pagar, entre otras cosas, esto.

Y, es más, y perdonen que lo diga, este juego es propio de países de otras latitudes, no de un país desarrollado.

En Suecia, por ejemplo, quien la hace, la paga.

La recapitalización con dinero público de entidades con problemas sólo debe hacerse en aquéllas que sean viables. Y la mejor señal sobre la viabilidad futura de una entidad financiera es que inversores privados estén dispuestos a arriesgar su dinero en ella.

Y eso es exactamente lo contrario de lo que se dispone a hacer el gobierno.

En aquellas entidades que no logren demostrar su viabilidad, lo lógico sería iniciar un proceso de liquidación ordenada que proteja los legítimos intereses de los depositantes. Porque es perfectamente posible y compatible garantizar los depósitos y liquidar ordenadamente una entidad.

No tiene sentido decir que no se dejará caer a ninguna entidad. Deberán caer todas aquellas que resulten inviables. Hay que evitar una permanente transfusión de dinero público hacia unos

bancos o unas cajas de ahorros *zombies* que lastrarían el proceso de recuperación económica.

Por si fuera poco, el Gobierno ha apostado por apoyar, mediante incentivos indiscriminados, las fusiones entre entidades financieras. Apoyos que alcanzan incluso a entidades que supuestamente no tienen problemas de solvencia.

Es decir, ha decidido regar el sistema financiero con un *manguerazo* de dinero de los impuestos de todos los españoles. No hay ninguna razón que justifique transferir rentas del contribuyente a aquellas empresas financieras que no tienen problemas de solvencia. Ninguna. Cuando esto se hace se están dilapidando recursos públicos.

El Gobierno ha decidido esconder, también por la vía de este *manguerazo*, la verdadera magnitud de los problemas en el sistema financiero español. Problemas que en unos casos provienen de la mala gestión, y en otros de algo peor que la mala gestión, como es el caso de la Caja de Castilla-La Mancha.

El resultado es que no se premia la buena gestión sino que se garantiza a directivos incompetentes la permanencia en sus puestos mientras reciben dinero de los contribuyentes.

El dinero de los impuestos de todos los españoles no debe ser utilizado para tapar la mala gestión o los intereses inconfesables que resultan de la gestión politizada de muchas Cajas de Ahorros.

Casi la mitad del sistema financiero español está compuesto por Cajas de Ahorros en las que los inversores privados carecen de derechos políticos.

En mi opinión, los inversores privados deben poder entrar en la recapitalización de las Cajas de Ahorros con derechos políticos no restringidos. Ha llegado el momento de despolitizar por completo el sector de las Cajas de Ahorros con un proceso de transformación que comience por permitir la entrada gradual de la propiedad privada en las cajas de ahorro, tal como ha ocurrido en otros países europeos.

Éste es el sentido de la despolitización. Leo con preocupación algunas cosas que se dicen sobre la despolitización de las cajas de ahorros. Hay quien interpreta que los puesto que hoy ocupan personas vinculadas a los partidos políticos tendrían que pasar a ocuparlos los sindicatos o las asociaciones de vecinos. Eso, con todo respeto para los sindicatos y las asociaciones de vecinos, no es la despolitización de las cajas. Y para hacer eso, mejor nos quedamos como estamos.

Desgraciadamente, las medidas anunciadas por el Gobierno hacen prever un proceso de reestructuración bancaria costoso para el contribuyente, poco transparente, injusto y antisocial.

Injusto y antisocial porque van a pagar justos por pecadores. Pagan los justos e inocentes contribuyentes, y cobran los pecadores, los dirigentes de las cajas de ahorros que han hecho mal su trabajo, que han demostrado ser incompetentes, pero que

reciben su “bonus” en forma de cantidades millonarias procedentes del FROB.

El Gobierno ha decidido conscientemente convertir la reestructuración bancaria en una suerte de *negociación política* entre el Banco de España y las Comunidades Autónomas con el peligro añadido de posibles vetos autonómicos. La posibilidad de un veto a operaciones de concentración bancaria desde gobiernos autonómicos, sean del color político que sean, me parece inaceptable.

Sería muy dañino para el sistema financiero y para la economía española que la reestructuración bancaria acabase convirtiéndose en algo parecido a la procelosa negociación de la financiación autonómica de los últimos años.

Por otra parte, también aquí se pone dramáticamente de relieve el proceso de debilitamiento del Estado. Que un Estado declare su incapacidad de actuar ante algo tan serio como la actual crisis financiera es señal de lo lejos que hemos llegado en la desvertebración del Estado.

Estamos padeciendo las consecuencias de haber llevado al Estado a una posición residual, cuando lo que necesitamos es un Estado fuerte capaz de resolver los problemas que nos afectan a todos. Con un Estado débil y fraccionado todos perdemos. Los problemas en el sistema financiero no se pueden parcelar por intereses territoriales o políticos.

Necesitamos potentes instrumentos de cohesión nacional que puedan ser usados, precisamente, en los momentos de crisis. No es sensato continuar con la centrifugación del Estado hasta el punto de hacerlo incapaz de cumplir con las funciones imprescindibles que tiene y debe seguir teniendo encomendadas.

No descubro nada nuevo si afirmo que, entre las principales naciones europeas, España es la que más intensamente se ha deteriorado en esta crisis, tanto en el plano económico como en el social. Creo que lo peor de la crisis habrá pasado cuando la economía española deje de caer y comience a registrar crecimiento positivo. Para ello queda mucho por hacer.

Como todos ustedes saben, definiendo una ambiciosa Agenda Nacional de Reformas para España.

Si España retrasa este proceso de reformas, pagará más caro que nadie el coste social de la crisis porque ésta se instalará en nuestro país durante mucho más tiempo.

La razón es simple: tan pronto comience la recuperación en el resto de Europa, el Banco Central Europeo comenzará a subir los tipos de interés. Si, para entonces, España todavía no ha culminado con éxito su reestructuración financiera, el impacto de la subida de los tipos de interés será dramático sobre una economía tan endeudada como la española.